

¿Tecnocracia?

LUIS CARLOS REYES



ES LUGAR COMÚN EN COLOMBIA elogiar a alguien diciendo que es “técnico, no político”. Este ideal, como el del presidente profesor, es un descendiente apocado pero directo de aquel del filósofo rey. Al “técnico no político” le gusta hacer gala de sus conocimientos profundos y revelar los matices de las toscas afirmaciones partidistas para recordarnos, vez tras vez, que la verdad rara vez está en los extremos.

Como sucede con los ideales platónicos, el

técnico no político es un lindo ideal. Pero, en la práctica, la tecnocracia colombiana sufre de conflictos de intereses serios. Buena parte de la tecnocracia que moldea el discurso político del país trabaja para el Gobierno, para las organizaciones de lobby de la industria privada (que por alguna razón suenan como algo respetabilísimo cuando se habla de los “gremios”), o para las firmas que viven de hacerles consultorías al Gobierno y a los gremios. Y como darle patadas a la lonchera es un lujo que incluso los tecnócratas tienen que pensar dos veces, la tecnocracia resulta ser buenisima matizando y relativizando los cuestionamientos que se le hacen al *statu quo*, mientras que guarda un silencio prudente (o habla bien bajito, esperando que no la escuchen) cuando de criticar los argu-

mentos flojos del Gobierno y el lobby empresarial se trata.

Ejemplo: el año pasado, la Ley de Financiamiento pasó pese a que más de 70 doctores en economía, profesores de las principales universidades del país, firmaron una carta cuestionando los beneficios tributarios que la ley otorgaba a las empresas. Y, sin embargo, la tecnocracia hizo el menor esfuerzo posible para rebatir de frente los argumentos especiosos que salían del Ministerio de Hacienda, y la ley pasó.

Todos los pronunciamientos técnicos se hacen en un contexto político. Lo que se elige callar es tan importante como lo que se elige decir. Y, la verdad, el silencio de la tecnocracia colombiana no habla bien de ella.

@luisrch

Inquietudes

JOSÉ FERNANDO ISAZA



EN LOS PRIMEROS MINUTOS DE LA intervención del presidente, en la noche del 21 de noviembre, más que un líder parecía un motivador de algún evento barato de autoayuda. Condenó los hechos de vandalismo y amenazó aplicar todo el peso de la ley con una contundencia que no utiliza para condenar los bombardeos que matan menores, ni los asesinatos de reinsertados, líderes sociales e indígenas.

¿A quién benefician los actos vandálicos? No a los organizadores de los movimientos sociales, pues los hechos de violencia reducen el efecto de la movilización al desplazar el énfasis de la comunicación a estos hechos y disminuir así el significado político del evento. Favorecen más a los gobiernos autoritarios, ya que les permiten desplegar todo tipo de medidas represivas para desestimar la movilización.

En las marchas hay infiltrados: el jueves a las 9:00 a.m., en Suba, los manifestantes detectaron a dos policías en servicio activo vestidos de civil. ¿Qué pretendían? ¿Cuidar a los manifestantes? ¿O identificar a los líderes? ¿O estimular el vandalismo?

Durante la alocución del viernes 22 de noviembre, el presidente recordó que por norma constitucional es el jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es claro e importante; tiene el poder operativo sobre el Ejército y la Policía, pero a la vez la responsabilidad por sus actuaciones. No puede así eludir los señalamientos de los organismos de control y las entidades internacionales por los excesos de la fuerza pública.

Esta norma constitucional se aplica al jefe de las Fuerzas Armadas durante el nefasto periodo de los asesinatos de civiles indefensos por algunos miembros del Ejército.

La acción de los agentes armados del Estado debe ser proporcional a los ataques y riesgos. ¿Responder en grupo con patadas en la cara al reclamo airado de una mujer es proporcional? ¿Dispararle a la cara una bomba lacrimígena a un joven desarmado es una respuesta adecuada?

El Gobierno dice que respeta la movilización, pero días antes se efectuaron 27 allanamientos en Bogotá, muchos de ellos ilegales. El realizado a la publicación cultural *Cartel Urbano* se hizo con base en una fuente anónima y se justificó porque promovían las marchas.

En algunos casos parecería que el Esmad, más que proteger a los ciudadanos y los bienes públicos y privados, se utiliza para provocar a los manifestantes. En Boyacá no se presentaron hechos de orden público que lamentar, pues el gobernador solicitó la presencia de la policía regular y no el Esmad. En la Universidad de Caldas se evitó un enfrentamiento entre la policía y los estudiantes gracias a que el rector, frente a una tanqueta, solicitó que el Esmad no ingresara a la universidad y que él como rector controlaría el orden.

¿Qué buscó el Gobierno al disolver con gases lacrimígenos un cacerolazo el viernes 22 en la Plaza de Bolívar? Los participantes realizaban pacíficamente su protesta.

No se discute el deber y el derecho de las fuerzas de seguridad de impedir y controlar los actos de violencia y vandalismo; su acción debe enfocarse a estos grupos. No puede convertirse este accionar en redadas masivas.

Las protestas espontáneas de grupos de amplio espectro social y etario utilizando en la noche el ruido de las cacerolas evocan la frase: “Si no me dejan soñar, no los dejaré dormir”.

Osuna



Empalme poco diplomático

Paro verde

BRIGITTE LG BAPTISTE



LA ANGUSTIA POR EL CAMBIO AMBIENTAL global y la gestión adecuada de los motores de degradación nacionales o locales están siendo componentes visibles de las marchas y protestas de estos días, en conjunto con otra docena de temas que constituyen una amalgama de malestares complejos de desentrañar, con niveles mixtos de información, valores relativamente compartidos y perspectivas inciertas de solución. En muchos casos, como se observa en las propuestas de algunos colectivos, las exigencias se centran en cuestiones complejas relacionadas con ideas de sostenibilidad genéricas en los discursos globalizados, tales como la resistencia al fracking, el uso y comercio de fauna y flora silvestres, la deforestación, el control de la minería ilegal y la necesidad de entrar a la era de las energías renovables, sobre las cuales hay orientaciones y acuerdos internacionales, pero poca implementación.

La situación, independientemente de que la gente cuente o no con el conoci-

miento adecuado, de que esté actualizada en normatividad y gobierno o tenga claridad de los fundamentos empíricos que sustentan los reclamos (tema recurrente de estas columnas), refleja un componente esencial de la desesperanza de los jóvenes enfrentados a niveles de deterioro ambiental creciente que no está siendo confrontado por los gobiernos en muchos lugares del mundo. La lentitud en la adopción de medidas en cualquiera de estos temas, resultado de las mínimas inversiones de recursos públicos, es evidencia del desajuste de las percepciones acerca de la importancia de los temas sociales críticos: la crisis climática, por ejemplo, es una espada terrible sobre la cabeza de los jóvenes que tal vez a los mayores no preocupa tanto, salvo que entiendan que nadie va a poder o querer pagar sus pensiones.

Afrontar la crisis ambiental sigue siendo un reto profundo de la gobernabilidad contemporánea y, a pesar de la idea de adoptar unas transiciones para movernos rápidamente hacia un mundo más sostenible sin un traumatismo generalizado, no parece haber la diligencia requerida. Por el contrario, la desconfianza crece, el tiempo corre y la situación se agrava, con lo cual las tensiones también se agudizan y en la eferescencia se aprovechan diversas fuerzas

para reposicionarse, normalmente no las que tienen las mejores intenciones o con poca capacidad de hacerlo fuera de los estereotipos simplistas.

Cualquier diálogo nacional que se establezca deberá considerar el peso que las decisiones de política ambiental tendrán en la pacificación del país, pues estas demandas no se solucionarán de la misma manera que otros temas: las tendencias no mejorarán, la única opción es el diseño de una cultura de adaptación. El riesgo es que el miedo nos paralice y pretendamos replegarnos a un mundo premoderno, donde la capacidad de generar recursos para apalancar la transición se vea severamente afectada, pues, aunque el modelo en colapso abra paso a otras alternativas, la realidad de los costos de las reformas no desaparecerá. Colombia estaría mejor posicionada que la mayoría de países para afrontarlo, pero se requiere conciencia de la materialidad de las aspiraciones que se plantearán: ningún modelo de sociedad puede convivir con la minería ilegal y sus efectos, ni prohibir la legal en el paroxismo.

Obviamente, nada es pensable si no detenemos el desangre y la muerte de líderes, autoridades indígenas o civiles desarmados e inermes frente al narcotráfico y la corrupción.